

Empoderamiento y supervivencia: el trabajo humanitario en los enfrentamientos civiles

Martha Thompson

Introducción

«Espérense», dijo el guía. «Los soldados del Batallón Bracamonte cruzaron el río y podrían subir esta colina». Era abril de 1989, una compañera de trabajo y yo estábamos visitando las zonas de guerra del Chalatenango, en la parte norte de El Salvador. A principios de los ochenta, los militares saquearon la zona, masacrando a la población y destruyendo sus posesiones. Los supervivientes huyeron. Desde 1983, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) controlaba la zona y, en 1987, 4.500 refugiados regresaron de Honduras. Aunque continuaba el conflicto, cada vez más refugiados regresaban al Chalatenango rural. Organizaciones de la Iglesia salvadoreña, que contaban con la cofinanciación del Gobierno británico, ayudaron a estas comunidades a reconstruir sus vidas.

Las comunidades nos habían asignado a Don Jesús, un hombre de 55 años, como guía durante nuestra visita de 4 días. Como muchos agricultores de subsistencia, trabajaba como temporero en la costa durante 3 meses al año. Había trabajado en muchas plantaciones, incluyendo la de Alfredo Cristiani, el presidente electo. «Dicen que Cristiani se preocupa por los pobres. Pero cuando trabajábamos en su finca cafetera y pedíamos salarios más altos, llamó a la Policía Nacional para que nos vapuleara». Un mes más tarde, me reuní con un diplomático europeo en San Salvador. Había cenado recientemente con Cristiani y había sido una experiencia muy agradable. El nuevo presidente era encantador, inteligente y preocupado por la pobreza –muy diferente de la típica imagen de las personas poderosas de la derecha salvadoreña.

El diplomático y yo vimos las dos caras del poder: una reservada para los semejantes, la otra para los inferiores. La visión que tenemos de la realidad está influida por los argumentos que escuchamos. Los trabajadores humanitarios se conmovieron y cambiaron al oír los argumentos de los pobres de El Salvador.

El hecho de que la población marginada haya compartido sus percepciones con nosotros nos obliga a dar testimonio de su situación. Este artículo describe la realidad del trabajo humanitario durante una prolongada guerra contrainsurgente y reflexiona sobre lo que significa trabajar para una ONG internacional en este contexto. Describe cómo el conflicto nos afecta a nosotros, a nuestro trabajo y a nuestros socios locales.

Antecedentes: la guerra entre 1980-91

El Salvador se caracteriza por la distribución injusta de riquezas y recursos y por la falta de un sistema legal equitativo. Estas injusticias estaban detrás de la guerra de once años y siguen sin resolverse. La sociedad salvadoreña es como una pirámide achatada: la oligarquía se encuentra en un vértice diminuto; debajo hay una capa un poco más grande compuesta por el Ejército, seguida por un estrato pequeño de clase

media; la mayor parte de la pirámide está integrada por individuos desesperadamente pobres. Uno de cada dos adultos es analfabeto y el salario medio diario es inferior a \$1. Siete de cada diez personas son agricultores de subsistencia y más del 75% de las tierras siguen siendo propiedad de una fracción minúscula de la población (una situación que el acuerdo de posguerra sobre las tierras no ha conseguido mejorar). El país estuvo bajo Gobiernos militares desde 1932 hasta 1979, un período de golpes de estado sucesivos, violencia promovida por el Estado y elecciones fraudulentas que mantenían a los civiles apartados del poder.

Esta situación tiene sus raíces en la Conquista. Después de los españoles, que desalojaron a los indios de sus tierras y les obligaron a cultivar añil, llegaron los criollos, que se apoderaron de tierras para cultivar azúcar y criar ganado. A principios del siglo XX, los magnates del café concentraron la mayor parte de las tierras y de la riqueza en manos de 14 familias, que fueron creciendo hasta llegar a las 250 que comprende la oligarquía actual.

Los salvadoreños ricos estaban acostumbrados a tratar el país como si fuera su patio trasero. Podían adueñarse de la tierra de un campesino simplemente ampliando su valla. Un hombre rico podía violar a una mujer pobre sin pensárselo dos veces; prestarse a sí mismo dinero de los bancos nacionales; emplear a la Policía Nacional para que reuniera trabajadores para sus plantaciones o para que matara a los trabajadores de los sindicatos; y pagar impuestos mínimos imponiendo exacciones a los pobres hasta hacerlos morir de hambre. Los ricos formulaban leyes que estructuraban la economía según sus necesidades y encarcelaban a los alborotadores. Lo controlaban todo, utilizando el Gobierno para concentrar su poder y las Fuerzas de Seguridad para mantenerlo.

Se justificaban diciendo que los pobres eran infrahumanos y que, por consiguiente, no tenían derechos. Se podían apropiarse de las tierras de los pobres aunque éstos no recibieran compensación legal alguna ni tuvieran voz en el proceso de creación de leyes. La asistencia sanitaria y la educación estaban fuera del alcance de los pobres porque, de recibir educación, causarían problemas. Se les obligaba a alistarse en el Ejército y se les cobraba impuestos por cortar un árbol en sus propias tierras. Hoy, viven a base de frijoles y tortillas (tortas de maíz), en casas hechas de adobe, caña y latas aplastadas. Sus hijos son afortunados si tienen la oportunidad de poder ir a la escuela o de ver el interior de un hospital cuando están enfermos. La mayor parte de los hogares no tienen ni agua corriente ni electricidad. Los pobres están a disposición de los ricos. Incluso hay un término salvadoreño que les califica: *chusma*.

Las 20 rebeliones que han estallado desde la Conquista han sido brutalmente reprimidas por el Ejército o por los ricos y sus matones, que aterrorizaban a los salvadoreños obligándoles a conformarse con su situación. En 1932, el Ejército reprimió una rebelión en la que indios y campesinos habían matado a unas 150 personas. En una semana, el Ejército masacró a 30.000 campesinos en La Matanza, silenciando las protestas durante las siguientes tres décadas.

En los años setenta, la «opción por los pobres» de la Iglesia católica empezó a apoyar programas de formación, cooperativas, escuelas y centros de salud. El efecto de estos programas fue verdaderamente subversivo. Hizo que los salvadoreños pobres empezaran a sentir que tenían derechos, incluido el derecho a luchar por el cambio. El FMLN surgió en los años setenta, sosteniendo que los medios pacíficos para conseguir la justicia no eran viables ante el fraude electoral y la represión violenta. En 1979, la organización de derechos humanos Socorro Jurídico documentó 1.000 matanzas en un mes. Después del asesinato de monseñor Romero en marzo de 1980,

miles de personas se unieron al FMLN y la guerra estalló en ese mismo año. Los sandinistas acababan de llegar al poder en Nicaragua y Guatemala estaba en guerra. La administración Reagan, reaccionando ante estos conflictos en el contexto de la Guerra Fría, apoyó al Gobierno de El Salvador con grandes ayudas militares y económicas, como parte de su lucha declarada contra el comunismo internacional.

En 1981, el FMLN controlaba gran parte de El Salvador. El Ejército respondió con la táctica de la ‘tierra quemada’, con el objetivo de eliminar a cualquiera que apoyara el FMLN y demostrar a los civiles a lo que se arriesgaban si las guerrillas ocuparan las áreas en las que vivían. Los no combatientes se convirtieron en el blanco del Ejército, que exterminó a comunidades enteras. La población de Mozote fue masacrada en un día: más de 1.000 muertos y sólo 2 supervivientes. En el río Sumpul, el Ejército asesinó a más de 300 campesinos mientras intentaban alcanzar un lugar seguro en Honduras.

En 1983, la protesta internacional contra las violaciones de los derechos humanos era inmensa en el país. El Gobierno de El Salvador estaba perdiendo la batalla política. Los EE.UU. le aconsejaron una estrategia de ‘conflicto de baja intensidad’, aunque los efectos sobre los civiles no fueran en absoluto de baja intensidad. El Ejército empezó a bombardear el campo de modo intensivo. Los civiles se entregaban al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y se unían a los 300.000 desplazados que vivían en campamentos controlados por el Ejército.

Una vez finalizado el conflicto abierto, los EE.UU. quisieron ‘construir una democracia’ en El Salvador. Se celebraron elecciones y el nuevo Gobierno democristiano anunció una nueva constitución y una reforma económica y agraria. Sin embargo, no se cuestionó la posición del Ejército y permaneció intacta la estructura de poder subyacente. Pero hacia 1986, la población empezaba a reorganizarse y los grupos desplazados empezaron a repoblar las zonas de conflicto.

En noviembre de 1989, el FMLN lanzó una ofensiva nacional, concentrando sus ataques en las áreas urbanas. Los combates empezaron en 50 barrios de la capital, San Salvador. El Ejército respondió con tropas de tierra, bombardeos y disparos desde helicópteros. No había transporte público y se había establecido un estricto toque de queda. Los trabajadores de la Iglesia abrieron clínicas provisionales para los heridos que no pudieran ser evacuados. (El CICR, Comité Internacional de la Cruz Roja, no se acercaba a la línea de fuego sin permiso del Gobierno). El Ejército saqueó estas clínicas, capturó a todos sus ocupantes y clausuró las instalaciones. Sólo en la capital, se calcula que hubo 1.000 muertos (la mayoría víctimas de los bombardeos) y que se saquearon alrededor de 30 oficinas de ONG y de organizaciones de base.

Se censuraron las noticias y el excoronel Roberto D’Aubuisson salió en la radio identificando a los ‘terroristas’, entre ellos los jesuitas de la Universidad Centroamericana (UCA). Las Fuerzas Armadas detenían a cualquier ‘sospechoso’ – miembros de las organizaciones de base, de las ONG, de la Iglesia, políticos, profesores y estudiantes–. Se distribuyeron panfletos que animaban a los salvadoreños a levantarse en armas contra ‘los subversivos’, como los extranjeros. Después del asesinato de los jesuitas, un hombre se puso delante de la Archidiócesis y gritó por un altavoz: «Los jesuitas están muertos, ahora morirá el resto de curas subversivos». Pero a pesar de la vigilancia y de las amenazas de muerte, la Archidiócesis siguió abierta.

Empezaron las negociaciones entre el FMLN y el Gobierno, mediadas por la ONU, y se firmó un acuerdo de paz en enero de 1992. La guerra había causado una gran agitación social. Uno de cada cinco salvadoreños había sido desplazado o vivía fuera del país. Casi 80.000 civiles habían sido asesinados o habían desaparecido, muchos más fueron torturados. *Americas Watch* calcula que más del 90% de las

violaciones las cometieron las Fuerzas Armadas o los Escuadrones de la Muerte. Los tribunales no han investigado los abusos. El Ejército niega la mayor parte de lo sucedido; los ricos simplemente no se creen lo que muestran las estadísticas de brutalidad. Estas diferentes perspectivas de la guerra dejan ver las profundas divisiones que existen en el seno de la sociedad salvadoreña.

La guerra y el desarrollo

La pobreza y la marginación no surgen de la nada. Para reconocer la injusticia hay que entender que se basa en una distribución del poder que perpetúa la exclusión social y económica.

Para hacer frente a la pobreza es necesario luchar contra sus causas: el desarrollo se basa en dar herramientas a los pobres que les permitan mejorar su situación. El empoderamiento implica tener poder para provocar cambios, como ilustra el siguiente adagio: «Si a una persona le das pescado, come un día. Si le enseñas a pescar, comerá el resto de su vida». La educación y la formación técnica confieren cierto poder y eso en sí mismo ya cambia el *status quo*. Pero la cuestión es: «¿Quién controla el lago en el que pescan las personas?». Éstas no pueden luchar contra la injusticia que causa su marginación a no ser que cambie el equilibrio de poder que la mantiene, como demuestra el siguiente ejemplo.

En 1982, en la costa de Usulután, el FMLN expulsó a un propietario rico de una de sus propiedades que producía algodón, grano, camarones y sal. Hasta entonces, la hacienda había funcionado de modo semifeudal, con ‘peones’ que trabajaban como siervos y no como trabajadores asalariados. Muchos de ellos después se instalaron en las tierras como agricultores de subsistencia. Una federación de cooperativas les permitió acceder a préstamos para reparar la salina, cuyo funcionamiento se reanudó en 1987. En 1988, una fuerte inundación dañó la salina y la cooperativa buscó fondos para repararla de nuevo.

Era un buen proyecto. Muchos de los trabajadores estaban desplazados y trabajaban en la salina que les mantenía económicamente, a la vez que aprendían sobre la organización comunitaria. Un organismo de ayuda les proporcionaba los fondos necesarios, se llevaron a cabo las reparaciones precisas, la cooperativa produjo una cantidad considerable de sal de alta calidad y los representantes fueron a ver a los compradores para negociar su precio. Esperaron a que vinieran a recoger la sal. Después de varias semanas, los representantes volvieron a ir a ver a los compradores. Éstos dijeron que el propietario de la hacienda les había avisado a todos. Era el propietario de la única empaquetadora de sal del país y había declarado que nadie que comprara sal de la cooperativa podría empaquetarla ahí. El propietario de la empaquetadora esperó varias semanas más, hasta que los trabajadores necesitaran desesperadamente dinero en metálico y hubiera vencido el plazo de pago del préstamo. Entonces les ofreció el 70% del precio de mercado. Las opciones de la cooperativa eran aceptar su oferta o ver como se pudría la sal. El año siguiente la cooperativa negoció un buen precio con los compradores. Cuando el propietario de la hacienda vio que se dirigían camiones a la cooperativa, hizo que la base militar más cercana emplazara soldados en la carretera y los hiciera regresar.

Ésta es la realidad que entraña el apoyar al ‘empoderamiento’ de los pobres en una sociedad controlada por personas empeñadas en evitar el cambio. En El Salvador, el trabajo de desarrollo conducía inexorablemente a la confrontación con las fuerzas de poder, implacablemente contrarias al cambio.

La violencia estatal

El Gobierno contaba con la represión. Secuestraba a personas sacándolas de sus hogares y las hacía desaparecer. Algunos rehenes fueron torturados y asesinados, y sus cuerpos abandonados en lugares públicos. En Chalatenango, una mañana, los alumnos de una escuela llegaron al colegio y se encontraron con la cabeza de su profesora encima del escritorio. Se disparaba a los peatones desde vehículos en marcha o se entraba en las casas y se mataba a sus ocupantes a quemarropa. Se reunía a los hombres y se les torturaba en público. Se violaba a mujeres delante de sus familias, se llevaban niñas a los cuarteles. Se amenazaba a los niños delante de sus padres, se les interrogaba o se les encarcelaba con ellos. Se saqueaban oficinas y casas. Se seguía a las personas o se las intimidaba por teléfono o por carta, a veces con amenazas de muerte contra ellos mismos o contra miembros de su familia. Se abrían las cartas, se pinchaban las líneas de teléfono, la inteligencia militar guardaba archivos de todo ‘sospechoso’ y comprobaba sus documentos personales constantemente. Esto afectó a los trabajadores humanitarios internacionales, además de a sus socios salvadoreños, que se convirtieron en el blanco de la represión. Entre enero y septiembre de 1989, representantes de 27 ONG y organizaciones de base salvadoreñas destacadas se vieron afectados por las medidas descritas en este apartado.

La contrainsurgencia

La contrainsurgencia militariza la política y politiza el Ejército. La ayuda humanitaria a los desplazados por la guerra se convierte en una cuestión militar. Como dijo el general Waglestein del Comando Sur de los EE.UU.: «En una guerra de guerrillas, la parte más importante en un territorio son los 15 centímetros entre las orejas de un campesino». Esto priva a los pobres del derecho a pensar por ellos mismos, a tener opiniones propias, a optar por algo y construir su futuro basándose en esa opción. Implica que los civiles deben estar bajo el control militar de un grupo para ser captado por el otro. Se supone que se puede controlar a los pobres mediante amenazas violentas y forzándoles a ser dependientes.

En El Salvador, se daba por sentado que cualquier persona que se resistiera a cooperar con las autoridades gubernamentales era del FMLN. No había término medio. Desaparecieron el debate y el desacuerdo, además del concepto de neutralidad. Si una institución definía la neutralidad como la independencia del Gobierno, empezaba a ser sospechosa. Cuando los civiles permanecían en una zona de guerra, aunque no se levantaran en armas, se les consideraba guerrilleros. Cualquier organización que cuestionara al Gobierno se veía como subversiva. En un contexto de contrainsurgencia, en el que el Estado debe controlarlo todo, ‘no gubernamental’ significa ‘antigubernamental’.

Esta realidad polarizó el mundo de los organismos de ayuda humanitaria. Por un lado, había organizaciones que insistían en mantener su autonomía y que eran perseguidas por ello. Por otro lado, estaban los programas de acción cívico-militar, apoyados por la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID) y ciertas Iglesias evangélicas. Los dos bandos discrepaban sobre las causas de la guerra, los problemas que planteaba y sus posibles soluciones. No existía un término medio.

El trabajo humanitario se desarrollaba en un ambiente de bombardeos indiscriminados, civiles heridos, combates armados, sabotaje económico, controles de

carretera y batidas militares, en un escenario de guerra: alambradas, controles, tanques, bombarderos. Se abusaba, detenía y mataba a los salvadoreños; los trabajadores humanitarios estaban expuestos a todos estos riesgos. No sólo se cuestionaba la neutralidad sino que se negaba su existencia.

El desarrollo se convirtió en una cuestión de defender el derecho a prestar ayuda de emergencia a todo el que la necesitara; asistir a los desplazados independientemente del control del Gobierno; apoyar a los civiles en su regreso y en su repoblación de las áreas de conflicto (como se establece en el Protocolo II de las Convenciones de Ginebra, aprobado en 1977, que El Salvador firmó); visitar comunidades en las zonas de conflicto que necesitaran asistencia humanitaria; formar una ONG y trabajar para aquéllas que ofrecieran programas educativos y de formación a las comunidades pobres; dirigir o hacerse miembro de una organización popular que representara los intereses de sus miembros; no ser objeto de ataques de las Fuerzas Armadas bien como comunidad beneficiaria, como ONG o como organización popular.

Los organismos de ayuda internacional con más experiencia trataban de compartir sus reflexiones con sus contrapartes salvadoreñas y de responder de modo rápido y creativo ante emergencias. Dado que era necesario entender la complejidad de la situación, el hecho de desarrollar la confianza mutua entre estas organizaciones era una prioridad que iba más allá de las relaciones burocráticas o vínculos de trabajo. En El Salvador, se le llamaba ‘acompañamiento’ o viajar juntos.

El acompañamiento del movimiento de repoblación

En 1985, había 250.000 salvadoreños desplazados. Una ONG salvadoreña (FUNDASAL) negoció, a través de la Archidiócesis, un acuerdo para repoblar Tenancingo, una pequeña ciudad en zona de conflicto, con el FMLN y el Gobierno. Esta iniciativa tuvo un éxito discutible desde el punto de vista de la neutralidad: el Ejército ocupó la ciudad por la mañana y el FMLN por la tarde. El proyecto se concibió sin un entendimiento adecuado de las motivaciones y lealtades de los desplazados. Sin embargo, tuvo un gran impacto. Hasta entonces, las zonas de conflicto habían sido tan inaccesibles como el lado oscuro de la luna. Casi de la noche a la mañana, el caso de Tenancingo hizo que la repoblación fuera una opción factible. Esto cambió radicalmente la percepción de los desplazados, que empezaron a considerar las repoblaciones apoyadas por la comunidad internacional como el camino hacia adelante.

Durante el mismo año, las Fuerzas Armadas lanzaron la ‘Operación Fénix’ para evacuar a los civiles de las áreas controladas por el FMLN. Sólo en el área del volcán de Guazapa, fueron expulsadas 2.000 personas. Estas personas no estaban dispuestas a malvivir en los campos de refugiados. Al poco tiempo, un comité de desplazados organizó una reunión nacional para declarar que el retorno a sus lugares de origen –la repoblación– era la única solución. En un audaz paso hacia adelante, al amparo de la cobertura de los medios de comunicación y de delegaciones extranjeras, dirigió dos operaciones de retorno desde campamentos de la Iglesia hasta las zonas de conflicto. La repoblación llevada a cabo por una organización de base se había convertido en una realidad.

La posterior repatriación de 4.500 refugiados de Honduras, bajo la protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), facilitó la entrada de organismos internacionales de ayuda y de ONG salvadoreñas en zonas rurales de conflicto. Además, surgieron nuevos grupos como respuesta al movimiento

de reasentamiento y al terremoto de 1986. Las ONG, cooperativas, institutos de investigación y organizaciones populares empezaron a abrir oficinas y a reclamar su derecho a existir. Ya que la contrainsurgencia impedía la discusión y el debate, fueron estos grupos los que rompieron el silencio público en torno al impacto de la guerra sobre los civiles.

Redefiniendo el conflicto

Los miembros del movimiento de repoblación, respaldados por el derecho internacional humanitario, reivindicaban el derecho a ser tratados como civiles en zonas de conflicto. Se negaban a ser víctimas. Se ganaron el derecho a regresar. La intervención internacional detuvo los bombardeos indiscriminados en el campo. En medio de los combates, se reconstruyeron comunidades, las personas empezaron a rehacer sus vidas y a fortalecer sus organizaciones. Necesitaban materiales y herramientas para construir casas y ayuda para subsistir. La asistencia organizativa, como la formación técnica, la capacidad de dirección y la asistencia sanitaria para la comunidad, llegaron con el tiempo. Más adelante, las comunidades necesitaron fondos para financiar pequeñas oficinas de coordinación regional y mulas para viajar.

La repoblación era una lucha diaria. También lo era la provisión de asistencia humanitaria ya que el acceso del personal y de los materiales y suministros se bloqueaba con frecuencia. Además, los ataques contra las ONG y las comunidades de repoblación seguían siendo habituales.

- **Acceso del personal:** San José de las Flores era una comunidad de repoblación en Chalatenango, a tres horas de viaje de San Salvador. Para visitarla era necesario solicitar un permiso militar dos semanas por adelantado, con copias del pasaporte. Si te concedían el salvoconducto, tenías que detenerte a una hora de San Salvador, donde los soldados se comunicaban por radio con la siguiente base y decidían si concedían paso franco. Si ese era el caso, seguías hasta El Paraíso, donde el coronel decidía si te dejaba pasar o no. Si lo hacía, tenías que ir a la jefatura militar en Chalatenango donde otro coronel tomaba otra decisión. Si firmaba el permiso, seguías hacia San José de las Flores. Los militares del punto de control en las afueras de la capital provincial decidían si te dejaban continuar. En cada punto de control había discusiones y el Ejército cuestionaba la validez del permiso, denegaba la entrada, consultaba con otros oficiales, interrogaba sobre el propósito de la visita, a quién ibas a ver, qué harías, si era necesario que te escoltaran soldados, para quién trabajabas, qué hacía tu organismo en el país; todo esto acompañado por inspecciones de los coches, un escrutinio interminable de los documentos, etc.
- **Acceso de suministros y materiales:** Los trámites burocráticos eran una verdadera pesadilla. Un campesino que dejaba una zona de guerra para vender sus productos solía aprovechar la oportunidad para comprar suministros para su familia. Para poder llevar una caja de cerillas, una vela o un kilo de frijoles a casa, necesitaba un permiso escrito del oficial encargado de los cuarteles. Las cargas de madera, herramientas y fertilizantes para proyectos de ayuda se retrasaban días. Las comunidades tenían que mandar delegaciones a los cuarteles y llevar a cabo protestas públicas para que las dejaran pasar. Por ejemplo, unas mujeres de la zona de conflicto de Morazán, durante dos meses caminaban siete horas diarias para llegar a los cuarteles y pedir al coronel que autorizara el paso de dos camiones cargados de leche, harina y azúcar –suministros que había

mandado la Archidiócesis para los niños de la escuela—. Al final, el coronel cedió y los camiones pasaron el control.

- **Ataques contra las ONG y las repoblaciones:** En un encuentro con una delegación norteamericana, de la Iglesia, el coronel de Chalatenango señaló hacia la zona de conflicto, donde vivían 29.000 civiles reconocidos como beneficiarios de varias agencias (incluido el ACNUR) y dijo, «Ahí no hay civiles, sólo hay guerrillas». El hecho de calificar a los civiles de guerrilleros daba licencia al Ejército para perseguirlos. Les podían bombardear, disparar con morteros y lanzar cohetes alrededor e incluso dentro de las comunidades. Las patrullas mataban a personas que caminaban solas o lanzaban granadas a las comunidades. Los soldados destruían las cosechas y mataban a los animales o acampaban cerca de los cultivos para que los agricultores, asustados, no cuidaran de ellos.

Pero los habitantes seguían regresando. El movimiento de repoblación era dinámico: tenía una plataforma nacional pero se basaba en organizaciones locales. Era una solución concreta al desplazamiento. Empoderaba a los campesinos –les daba la oportunidad de poner a prueba nuevas estructuras de autoridad y de organización social.

Los organismos de ayuda durante la guerra: compromiso e implicación

En un contexto de guerra, existen ciertas realidades intangibles que determinan el trabajo de los organismos internacionales de ayuda y hacen que se planteen preguntas reales. En El Salvador, un entramado de reglas no escritas definía cómo comportarse, con quién ser visto y qué se podía decir.

Un amigo salvadoreño me comentó en una ocasión: «El mayor problema es que se piensa que la guerra empezó cuando llegaron a El Salvador». Es difícil recordar que hay una urdimbre histórica invisible detrás de todo y de todos. Uno puede tratar a alguien simplemente como un trabajador de una ONG sin saber nada de su pasado como líder estudiantil... que fue torturado... que quizá había dicho algo que había causado la detención y asesinato de su mejor amigo... que otra persona fue detenida con él y liberada sospechosamente rápido... que su hermana estaba en el FMLN. Había razones por las que los individuos no podían cooperar o por las que ciertas cosas sólo podía hacerlas una persona en particular. Esas razones eran invisibles.

Las guerras civiles son íntimas: todo el mundo se conoce. Para los forasteros, el FMLN era un grupo anónimo pero para los salvadoreños se componía de hermanos, hermanas, primos, compañeros de trabajo, amigos de la infancia, hijos e hijas de sus vecinos. Casi nada de esto se podía expresar. La mayor parte de la vida de las personas se desarrollaba bajo la superficie: una persona podía estar en una reunión, oír que un familiar había sido asesinado y no poder expresar su dolor. Los extranjeros debían ser conscientes de la cantidad de cosas que no sabían y que no podían saber.

La guerra civil fue un proceso largo y complicado. Aunque un forastero puede aprender a contribuir, este aprendizaje no se acaba nunca. Existen grandes diferencias culturales e históricas entre un salvadoreño y un extranjero. Negándolo no se soluciona nada. Muchos trabajadores de la ayuda externa, cooperantes, son, como yo, de raza blanca, con una educación universitaria, de clase media y con buenas intenciones y planteamientos políticos progresistas. Nuestras vidas no nos preparan

para hablar el mismo lenguaje o tener la misma visión del mundo que un campesino salvadoreño en la parte inferior de la estructura de poder, que ha crecido en la pobreza, que ha sido despreciado desde su nacimiento y que ha vivido la represión como parte intrínseca de su vida cotidiana.

Los extranjeros a menudo se preocupaban por la agresividad de las protestas de las organizaciones populares. Un empleado de un organismo de ayuda preguntó «¿Siempre tienen que insistir en llamar ‘asesinos’ a los militares?». De hecho, tal ‘beligerancia’ se derivaba de la opresión y de la falta de justicia que había experimentado la población. Llegué a comprender esta parte no escrita de la historia gracias a largas charlas nocturnas con campesinos y a momentos que compartí con algunas familias pobres. Su historia refleja cómo han sido deshumanizados por una sociedad que les privaba de sus derechos y cómo se han visto frente a la revelación de que sí los tenían –pero que debían luchar por ellos–. En este contexto, la protesta era la manera más clara de reafirmar su humanidad. Era un derecho que se habían ganado. Era una manera de manifestar sus vivencias en una sociedad que se las negaba y, ante la ausencia de justicia, dejaba constancia pública de esa verdad.

Se hablaba en clave para sobrevivir. Los que se refugiaban en el anonimato de la ciudad tenían que reinventar sus historias personales –de dónde venían, quiénes eran– para ocultar su origen. En Tenancingo, por ejemplo, había personas con simpatías en ambos bandos y cuya máxima prioridad era la supervivencia. Todas las mujeres con las que trabajé habían perdido al menos a un familiar, 90% de los cuales habían sido asesinados por el Ejército y los Escuadrones de la Muerte. Con el tiempo, una por una terminaron por contarme sus historias. Lo que me sorprendió fue que sus relatos eran casi idénticos, pero cuando les preguntaba que quiénes eran los asesinos, decían «hombres que vinieron de noche, no lo sabemos» o «la guerrilla». Eso no tenía sentido. Les pedí que repitieran sus relatos y procuré escucharlos con toda mi atención. Entonces me di cuenta de que empleaban palabras y expresiones casi ritualizadas: sobre la reacción de los perros, el miedo que sintieron antes de que ocurriera, cómo entraron los hombres en sus casas de noche. Eran palabras clave. Al mencionar ciertos detalles (obvios para un campesino salvadoreño), intentaban decirme que el Ejército o los Escuadrones de la Muerte habían matado a sus seres queridos.

Yo era muy consciente de que la seguridad de las personas dependía de una red de comunicación muy frágil. Nosotros, los extranjeros, andábamos a ciegas, no acostumbrados a tener que disimular nuestros sentimientos y a tener que reescribir nuestro pasado para sobrevivir. Uno tiene que escuchar con atención lo que no se dice. Como trabajadores humanitarios queremos que la gente se comporte de acuerdo a nuestras expectativas culturales, que nos digan la verdad para que podamos confiar en ellos. Pero para quien intenta sobrevivir, ése es un lujo que no se puede permitir. Para ellos ‘hablar claro’ no era un camino hacia la confianza sino un riesgo innecesario. Las lealtades de las personas durante una guerra son complejas. Su primera obligación no es hacia los extranjeros, que tienen poca o ninguna implicación real en un proceso que ha causado tantas pérdidas humanas. Los trabajadores humanitarios saben que su concepto de ‘ser claros’ procede de un contexto y de una cultura política específica. Deben respetar la cautela de las personas y escuchar lo que no pueden decir con palabras.

La represión y la contrainsurgencia crean una situación que es cualquier cosa menos transparente. Un organismo de ayuda podía pedir total transparencia pero eso era pedir lo imposible. Muchos salvadoreños intentaban actuar con normalidad en medio de una guerra civil, viendo como asesinaban y torturaban a personas por hacer

lo que ahora se calificaba de subversivo. No sólo sobrevivían: estaban trabajando para romper el ciclo de la violencia. Para algunos, eso significaba un compromiso político con el FMLN; para otros, suponía oponerse al Gobierno. La contrainsurgencia tiene como misión negar el derecho de cada individuo a tener un punto de vista político independiente. Las personas sentían profundamente que tener opiniones propias era un derecho.

Durante la guerra, la politización de la vida cotidiana también afectaba a la transparencia. En El Salvador, la clave era realizar trabajo humanitario legítimo *dentro* de una realidad politizada, en lugar de buscar un espacio ‘apolítico’ (que no existía). La reacción de la población ante el cambio horario que impuso el presidente Duarte en 1987 para alargar el día, lo demuestra. Al avanzar los relojes una hora, los campesinos tenían que despertarse cuando todavía estaba oscuro. Se lo tomaron como otra muestra de la falta de consideración del Gobierno. La población empezó a distinguir entre el ‘tiempo de Duarte’ y el ‘tiempo antiguo’ y a poner sus relojes a la hora que correspondiera con sus tendencias políticas. El Ejército paraba los autobuses rutinariamente para que los soldados pudieran comprobar los relojes de los pasajeros y ver quiénes eran desleales al Gobierno. ¿Dónde estaba el espacio apolítico, cuando incluso pedir la hora estaba lleno de connotaciones políticas?

La transparencia y la responsabilidad ante el público no siempre son conceptos sinónimos. La responsabilidad ante el público significa garantizar que las personas reciban lo que necesiten, incluso en las zonas de conflicto. Sin embargo, durante unos 6 años era imposible visitar estas zonas sin correr peligro, así que la mayor parte de los organismos de ayuda tenían que actuar partiendo de los relatos de terceras personas sobre la situación de los civiles.

¿Hasta dónde llega nuestro compromiso?

Nos hacíamos esta pregunta a diario. Los organismos internacionales dan recursos a las personas para ayudarlas a cambiar su situación. Ellas deciden trabajar por el cambio y nosotros las apoyamos. Pero el problema no acaba aquí. Su decisión con frecuencia pone a nuestras contrapartes en peligro. En un contexto de contrainsurgencia, la asistencia que ayuda a los individuos a trabajar en favor del cambio puede convertirles en un objetivo de guerra.

Por ejemplo, una organización de base en una zona de conflicto recibió apoyo para un curso de formación. Un alumno fue detenido y torturado por militares cuando iba de camino a casa porque descubrieron que estaba aprendiendo técnicas de liderazgo.

En otro caso, se estaba encarcelando a tantos promotores de comunidades urbanas pobres que una ONG decidió dedicar una sesión de formación a enseñar cómo actuar ante tal situación. La escenificación de un arresto del Ejército implicaba tener a una persona en el suelo y a otras dos ‘vapuleándola’ y haciendo preguntas a gritos. Una de las preguntas era: «¿Quién te da el dinero para trabajar? ¿Qué organismo es?».

No es fácil responder a estas preguntas. Las personas deciden correr riesgos y nuestra colaboración nos involucra. Nosotros no asumimos los mismos riesgos. Pero ¿hasta qué punto nos comprometemos con la gente a la que respaldamos si su lucha por el cambio le pone en situaciones de peligro?

En este contexto, era imposible saber si lo que uno hacía o decía, o lo que otros te oían decir, podía poner en peligro a terceros. Por ejemplo, durante la ofensiva de 1989, fui a visitar varias oficinas de organizaciones de base con un colega para

encontrar nuevas maneras de distribuir la ayuda de emergencia. Sólo una oficina permanecía abierta. Tuvimos una conversación rápida con los que estaban ahí y fijamos otra reunión con ellos para el mismo día. Nunca llegaron: dos horas más tarde, el Ejército les había reunido a todos, incluyendo a un hombre con su hijo de dos años. Dejaron al niño en una celda mientras torturaban a su padre. Parte de esta tortura era escuchar los gritos de un niño que decían que era su hijo. De hecho era una grabación; el niño estaba solo, aterrorizado, hambriento y sediento pero no le pegaron. ¿Quién sabe el daño que se les hizo a estas dos personas? ¿Qué dijo el padre sobre otra persona para que dejaran de torturar a su hijo? ¿Qué recordará el niño del momento en el que su padre le dejó solo en un sitio tan terrible?

Uno puede darle mil vueltas a un incidente como éste. ¿La redada estaba planeada o fue la visita de dos extranjeros lo que atrajo la atención del Ejército? ¿Debería haber hecho una llamada telefónica en lugar de hacer la visita? Es imposible saberlo. Este ejemplo saca a la luz los dilemas éticos que surgen al apoyar a las personas –a nuestras contrapartes– cuyo trabajo les pone en peligro mientras nosotros seguimos en nuestra privilegiada posición de seguridad. Quizá lo único que se pueda hacer es trabajar para acabar con la represión y reaccionar con rapidez cuando alguien se sienta amenazado.

El empoderamiento en la práctica

Las estructuras de las ONG y de las organizaciones populares durante la guerra solían ser rígidas y jerárquicas pero estaban integradas por individuos muy creativos y entregados. Al trabajar en un estado de sitio permanente, estas organizaciones requerían cohesión, y ésta a menudo se obtenía por medio de un proceso de toma de decisiones impuesto desde arriba. El reto de apoyar a los salvadoreños, que luchaban contra las causas de su exclusión, consistía en ayudarles a dejar de considerarse víctimas de la guerra para actuar a favor de su propio desarrollo, incluso durante el conflicto.

Algunos refugiados tenían casi una década de experiencia colectiva en Honduras, que les daba una base para analizar el mundo, cuestionar su situación y emprender acciones. Cuando discutíamos con ellos sobre métodos de empoderamiento que a la larga se pudieran aplicar a sus propias estructuras organizativas, les preguntábamos qué oportunidades les ofrecía su trabajo para analizar y reflexionar sobre sus experiencias; les alentábamos a considerar la importancia de la organización colectiva y a reexaminar sus estructuras decisorias y sus mecanismos de distribución local. Examinábamos juntos el objetivo final de la actividad o de la organización y su relación con los miembros marginados de la comunidad; además, buscábamos potencial para educar y formar líderes. También intentábamos asegurarnos que los individuos de la base compartiera los mismos conceptos que la ONG que trabajara con ellos. No siempre obteníamos respuestas satisfactorias. A veces, dábamos un dinero como ‘capital semilla’ para ver qué hacían con él. El diálogo posterior nos ayudaba a construir un mejor entendimiento mutuo.

De víctimas a actores

La población que regresaba a las zonas de conflicto había vivido la guerra directamente. Eran los supervivientes de masacres, víctimas de las atrocidades cometidas por el Ejército, que habían visto niños asesinados con bayonetas y colgados

de vigas o arrojados contra los árboles. Aún así, esta población volvía a sus lugares de origen.

Completamente despobladas, las zonas de conflicto estaban incomunicadas con el resto del país, sin comercio, con carreteras descuidadas y sin ningún tipo de servicio público. Los que regresaban tenían que reconstruir sus casas, rehabilitar los campos y hacer lo que buenamente pudieran. Al hacerlo, aumentó su confianza en sí mismos. Empezaron a sentir que tenían derechos y vieron que existía una preocupación internacional por las violaciones de los derechos humanos que se llevaban a cabo en su país.

Para sobrevivir, los civiles necesitaban suministros, que se garantizara su seguridad física y que se respetaran los derechos humanos. Poco a poco, empezaron a enfrentarse al Ejército. Se beneficiaron de la presencia de observadores internacionales y gradualmente ganaron la suficiente confianza en sí mismos como para apelar al ACNUR y denunciar públicamente los abusos que habían sufrido. Los campesinos formaron delegaciones para visitar al coronel local y exigirle que respetara sus derechos. Éste era el mismo coronel que hasta hacía poco enviaba sus tropas a perseguirles por las montañas.

En Santa Marta, Cabañas, 300 personas anduvieron 20 kilómetros desde su población reasentada hasta la capital provincial y estuvieron de pie delante de los cuarteles durante tres días, hasta que el coronel dejó salir a los camiones de fertilizante que había retenido.

En Segundo Montes, Morazán, al constatar que el Ejército había matado más de 500 gallinas de una granja avícola perteneciente a este importante asentamiento, los miembros de la comunidad cargaron las gallinas muertas en camiones, las llevaron a la capital provincial y las arrojaron delante del cuartel. En Guarajila, Chalatenango, donde 1.100 personas se habían reasentado de forma autónoma, el Ejército pidió al pueblo que entregara a sus líderes. El pueblo se unió y gritó: «Todos somos líderes. Para llevar a uno de nosotros, tendrán que detenernos a todos». El Ejército no fue capaz de señalar a nadie en particular. Es difícil apreciar el impacto de estos actos en una sociedad donde siempre se habían silenciado todas las protestas. Todavía más difícil de creer es que los actores fueran campesinos que habían vivido directamente la violencia y que conocían el precio de lo que estaban haciendo.

Algunos acusaron al FMLN de forzar a las personas a vivir en las zonas de conflicto, considerando todavía a los campesinos como propiedad de un bando o del otro. Pero la gente no se puede manipular hasta el punto de obligarla a tomar este tipo de riesgos y a vivir continuamente en peligro. Los campesinos estaban haciendo frente al Ejército en medio de una guerra, pese a los continuados abusos de los derechos humanos. En cuanto obtuvieron varias victorias pequeñas, empezaron a darse cuenta de que ellos también tenían cierto poder.

Un incidente en San José de las Flores ilustra este poder en la práctica. La plaza del pueblo estaba llena de visitantes y periodistas que conmemoraban el aniversario de la repoblación y esperaban al obispo para celebrar la misa. Sin previo aviso, llegó el batallón Atlacatl y hubo un altercado. Los miembros de la comunidad les pidieron que se fueran. Como respuesta, los soldados empezaron a disparar a la iglesia por encima de sus cabezas y después a sus pies. De manera espontánea, los lugareños corrieron hacia los soldados. Estos huyeron, tirando granadas de gas lacrimógeno. La población desarmada les había echado, literalmente.

Las comunidades de repoblación empezaron a percatarse de su propia dignidad y del poder que tenían en un proceso de transformación difícil de frenar. Recibían cierto apoyo, pero lo más importante era que habían logrado algunos éxitos. Se dieron cuenta de que no siempre ganaban los poderosos y que ellos también tenían armas importantes. Su relación con el poder estaba cambiando. El redescubrimiento de su propia humanidad se convirtió en parte de su lucha.

Algunos podrían decir: «No, el Gobierno vio las repoblaciones como un peligro porque, en secreto, todos eran partidarios del FMLN». Yo creo que no. Las repoblaciones solucionaron algunos de los problemas de los desplazados y quizá beneficiaron al FMLN hasta cierto punto. Pero lo más importante es que otros campesinos estaban observando con atención lo que estaba pasando. Como me dijo un hombre de una comunidad bajo control militar: «¿Sabes? Cuando el Ejército invadió La Virtud (una repoblación) sus habitantes huyeron como animales. Se escondieron en cuevas, lo perdieron todo, el Ejército mató a todos los que encontró. Esas personas eran peores que animales. Pero ahora han vuelto; tienen escuelas, una clínica, están sembrando sus campos ¡y el Ejército no los puede parar! Sin embargo, aquí somos tan desgraciados como cuando empezó la guerra».

El hecho de que los individuos que habían sido víctimas empezaran a organizarse y a ganar terreno, supuso un gran avance. Empezaron a ver su relación con el poder de otro modo. Por esta razón, la clase gobernante les tachaba de peligrosos (y más amenazadores que el movimiento de guerrillas): porque ya no querían asumir el papel de marginados.

La opresión en El Salvador dependía de que una mayoría viviera en el miedo. Cuando se pierde el miedo, la estructura entera empieza a desmoronarse. El desarrollo depende de dos cosas: que los oprimidos cambien la percepción de su relación con el poder y que haya cambios estructurales reales. El movimiento de repoblación reunía estos dos factores, por eso amenazaba al *status quo*.

Después de haber vivido con valentía y esperanza durante la guerra es triste que, en época de paz, las comunidades repobladas no hayan sido capaces de construir sobre lo que habían iniciado. No han conseguido sustituir las estructuras y prácticas comunitarias rígidas de la época de la guerra por formas más abiertas y democráticas, y otros intereses relacionados con el poder y el dinero han socavado su unidad. No han sido capaces de afirmar sus demandas dentro de la agenda del FMLN y el liderazgo del FMLN no ha dado prioridad a sus necesidades de desarrollo. A pesar de esto, seguro que el importantísimo adelanto histórico en la imagen que tienen los pobres de sí mismos algún día encontrará una nueva manera de expresarse.

Nota

Varios antiguos compañeros han revisado los primeros borradores de este artículo. Sin embargo, los puntos de vista expresados son sólo míos y no pueden atribuirse a ninguno de los organismos de ayuda internacional para los que trabajé en Centroamérica.

Martha Thompson, *experta en salud pública, ha vivido en América Latina y en el Caribe desde 1979. Empezó a trabajar con refugiados salvadoreños a principios de los ochenta, inicialmente para Concern y más tarde para Catholic Relief Services*

(CRS), tanto en Honduras como en El Salvador. Después de ser trasladada a FUNDASAL, la ONG salvadoreña encargada del proyecto de repoblación de Tenancingo, se incorporó a OXFAM UK/I como responsable del programa en El Salvador, y más tarde trabajó como representante adjunta. Después fue consejera residente para el programa de regreso de los refugiados en Guatemala, cargo que dejó en 1995 para ocupar su actual puesto de trabajo como responsable del programa de desarrollo para Cuba y el Caribe oriental de OXFAM Canadá, con base en La Habana.

Este artículo se publicó por primera vez en Development in Practice, vol. 6, núm. 4, en 1996.